

# *Fuerzas Armadas y cuestión nacional en la Unión Soviética (1985-1991)*

Carlos TAIBO

Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.  
Centro de Estudios de Países del Este

Las fuerzas armadas han desempeñado en el sistema soviético un papel socializador de primer orden, que las ha convertido en responsables exclusivos de un buen número de tareas de control ideológico. Esta circunstancia se ha hecho notar en un marco caracterizado por la existencia de un Estado que ha controlado de manera muy estrecha a todos los agentes de socialización, y en consecuencia ha reducido la presencia de valores de conflicto y ha eliminado mensajes contradictorios. En este marco las fuerzas armadas han constituido un escenario muy propicio para una “socialización unilateralizada”. Varias dimensiones del servicio militar han presentado al respecto una importancia decisiva: un entorno sometido a reglamentaciones muy rígidas, la constante repetición de mensajes, la manipulación del grupo de pares para que ejerciese su presión en el seno del colectivo militar, y el empleo de la autoridad de los agentes socializadores.

Al margen de lo anterior, es evidente que las fuerzas armadas han sido un adecuado escenario para facilitar la reducción de las tensiones nacionales y propiciar la instilación de los valores “soviéticos”. Las fuerzas armadas lo han sido de una entidad supranacional, circunstancia que ha marcado muchas de sus características y que ha experimentado modulaciones con el paso del tiempo. Así, si en 1924, y para hacer frente a una situación en la que eran numerosas las minorías étnicas exentas del servicio en filas, se adoptó un plan quinquenal de desarrollo de formaciones militares nacionales, en 1938 se tomó la decisión de abolir el principio de organización territorial y, con él, las unidades nacionales existentes y las escuelas de formación de oficiales procedentes de grupos minoritarios. En 1941,

con ocasión de la invasión alemana y de la ocupación consiguiente de buena parte de la URSS europea, se procedió, sin embargo, a la reconstrucción de las unidades nacionales, cuyo papel fue decisivo durante toda la segunda guerra mundial. Concluida ésta, las estructuras que nos ocupan fueron desmanteladas en beneficio de una organización unitaria que ha pervivido hasta nuestros días y que consiguió implantar un servicio militar de carácter prácticamente universal.

## I. La composición nacional de las fuerzas armadas soviéticas

De acuerdo con todas las estimaciones, desde 1945 el porcentaje de eslavos que, vía conscripción, ha accedido a las fuerzas armadas soviéticas se ha ido reduciendo cada año. Si en 1969 era de un 74%, en 1977 se situaba en un 69% y en 1985 en un 63%. La presencia respectiva de originarios de las repúblicas de cultura islámica y de otras minorías nacionales era de un 13% en ambos casos en 1970, un 18 y un 13% en 1977, y un 24 y, de nuevo, un 13% en 1985<sup>1</sup>. El descenso en las tasas de crecimiento de la población en las repúblicas eslavas —y en general en los territorios europeos— estaba en el origen de la situación que nos ocupa<sup>2</sup>. El porcentaje de “europeos” en el conjunto de la población soviética era de un 77% en 1979, pero debía emplazarse tan sólo en un 70% en el año 2000<sup>3</sup>. Bien es verdad que algunos signos apuntan a una inflexión en este proceso: en las propias repúblicas del Asia central se ha hecho notar un descenso en la tasa de fertilidad, que, sin embargo, se recuperaba levemente entre bálticos y eslavos<sup>4</sup>.

En un proceso inverso al verificado en lo que a los soldados respecta, desde la segunda guerra mundial la presencia de oficiales procedentes de los grupos minoritarios se ha reducido en comparación con tiempos pasados, de tal manera que los escalones superiores de la jerarquía militar han pasado a ser cubiertos, prácticamente con exclusividad, por las nacionalidades eslavas. T. Rakowska-Harmstone, tras estudiar listas de generales soviéticos y analizar su previsible origen nacional, llegó a la conclusión de que entre los generales nombrados en el periodo 1940-1976, un 91% eran eslavos (60% de rusos, 20% de ucranianos, 4% de bielorrusos y 7% de difícil adscripción)<sup>5</sup>. Entre 1952 y 1976 fueron elegidos miembros del

<sup>1</sup> Ellen Jones, *Red Army and Society* (Allen & Unwin, Londres, 1985), pág. 188.

<sup>2</sup> Murray Feshbach, “Demographic trends in the Soviet Union”, en *Nato Review* (nº5, octubre de 1989, vol. 37), pág. 15.

<sup>3</sup> M. Bernstam, “The Demography of Soviet Ethnic Groups in World Perspective”, en Robert Conquest (dir.), *Nationality and the Soviet Future* (Hoover Institution, Stanford, 1986), pág. 319.

<sup>4</sup> Feshbach, op. cit., pág. 11.

<sup>5</sup> T. Rakowska-Harmstone, “Sur l’armée et les nationalités”; cit. en Héléne Carrère d’Encausse, *L’Empire éclaté* (Flammarion, París, 1978), pág. 199.

Comité Central del PCUS, por otra parte, 101 generales; 97 eran eslavos, y de entre ellos 78 rusos<sup>6</sup>. Otro estudio, esta vez sobre oficiales de alta graduación del Ministerio de Defensa, identificaba tan sólo un 2,7% de los mismos procedentes de las repúblicas de cultura islámica<sup>7</sup>. En 1979, en fin, la DIA (Defense Information Agency) estadounidense publicó los datos de un estudio sobre los apellidos de algo más de diez mil militares soviéticos y llegó a la conclusión de que la presencia eslava en el cuerpo de oficiales se hallaba sobredimensionada en relación con los porcentajes de población correspondientes: mientras, en 1979, los eslavos eran algo menos del 73% de los ciudadanos soviéticos, proporcionaban cerca del 93% de los oficiales. Por lo que a los no eslavos respecta, y con la única excepción de los judíos, su presencia se encontraba siempre por debajo de la verificada en el total de la población: mientras los no eslavos eran en 1979 un 27,22% de los soviéticos, tan sólo aportaban poco más del 5% de los oficiales de la marina y del ejército del aire, y algo más del 8% de los del ejército de tierra<sup>8</sup>.

Bien es cierto que estos datos deben ser analizados con cautela. Jones ha subrayado, en particular, que una buena parte de los oficiales más veteranos se incorporaron a las fuerzas armadas en un momento en el que el desarrollo educativo de las zonas supuestamente marginadas era muy escaso, y aventura que si la situación se igualase desde origen tal vez podría alumbrarse la conclusión de que no existen, en realidad, discriminaciones de relieve<sup>9</sup>. De hecho, algunas informaciones recientes apuntaban un incremento sensible del número de jóvenes oficiales originarios de minorías nacionales.

Sean las cosas como fueren, y retornando a los problemas planteados por el personal humano que, a través de la conscripción, accedía a las fuerzas armadas, lo primero que hay que recordar es que la presencia, cada vez mayor, de no eslavos ha planteado, como es fácil suponer, problemas diversos. Así, y por lo que respecta a las capacidades profesionales, son muchos los especialistas que se han referido a los niveles educativos, supuestamente bajos, de las poblaciones no eslavas, y en particular de las del Asia central. Jones ha señalado, sin embargo, que aunque es cierto que el nivel educativo medio de esas poblaciones ha sido inferior al característico entre, por ejemplo, los rusos, ello se debía al bajo nivel que exhibían grupos de población no sujetos a la conscripción, como es el caso de mujeres y personas de edad. Otro elemento de interés ha sido el configurado por el grado de formación técnica, en relación con el cual se ha argumentado en más de una ocasión que las diferencias "regionales" en la calidad de la educación hacían poco menos que inviables los intentos de com-

---

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> National Foreign Assessment Center, *Directory of Soviet Officials. National Organizations*.

<sup>8</sup> Datos recogidos en Julián Peñas Mora, "La incidencia de las nacionalidades en las fuerzas armadas soviéticas", en *Boletín de información del CESEDEN* (nº 223, 1991), pág. 72.

<sup>9</sup> Jones, pág. 201.

paración de las situaciones respectivas. Sin embargo, diversas fuentes sugieren que los programas educativos han exhibido un notable grado de homogeneidad, y que las diferencias en lo que respecta a datos de relieve eran más bien escasas, con resultados en los que, por cierto, la Federación Rusa no solía ocupar puestos de privilegio.

Aunque desde el punto de vista de Jones los niveles de dominio del ruso demostrados por los jóvenes reclutas eran suficientes para comprender las órdenes de sus superiores y recibir con provecho una instrucción básica —casi un 90% de los soldados que se incorporaron al servicio militar en 1970 declaraban hablar con fluidez el ruso—, otros especialistas han subrayado los problemas existentes. El coronel Deryuguin señalaba recientemente que “alrededor del 90% de los reclutas que proceden del Asia central rural no hablan una palabra de ruso, o lo hablan muy mal. Incluso entre los jóvenes procedentes de las zonas urbanas del Asia central, un 5% —y esta cifra no deja de crecer— no habla el ruso”<sup>10</sup>. Murray Feshbach, que ha reproducido porcentajes semejantes, se ha hecho eco de estimaciones soviéticas que sugieren que únicamente un 47% de los uzbechos que residen en un medio urbano, y un 20% de los que habitan en el medio rural, hablan con fluidez el ruso, lo cual quiere decir, a la postre, que sólo un 28% de los naturales de Uzbekistán reúnen esa cualidad<sup>11</sup>. Según fuentes soviéticas, menos de una tercera parte de los kirguizes y de los tadjikos y poco más de una cuarta de los turkmenos hablaba el ruso de forma fluida<sup>12</sup>. El propio mariscal Ogárkov, jefe del Estado Mayor a principios de la década de 1980, se refirió en más de una ocasión a las dificultades que la falta de dominio del ruso planteaba en lo relativo a la formación de los soldados: “Por desgracia, un número significativo de los jóvenes accede al ejército con un conocimiento débil del ruso, circunstancia que dificulta seriamente su formación militar. Como se sabe, en las fuerzas armadas se emplea el ruso en normas, instrucciones, libros de texto, orientaciones técnicas y armas”<sup>13</sup>. Ni siquiera la idea de que entre los jóvenes el dominio del ruso es cada vez más aceptable parece confirmada. Yurii Bromlei, un demógrafo soviético, deducía de los resultados del censo de 1979 que “en algunas repúblicas los jóvenes conocen el ruso peor que la población de edad madura”<sup>14</sup>. A resultados parecidos llegaba otra investigación, que concluía que “los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años conocen mejor el ruso que los que tienen entre 16 y 19”<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> Yu. I. Deryuguin, en *Argumenti i fakti* (nº 35, 1988).

<sup>11</sup> Feshbach, op. cit., pág. 12.

<sup>12</sup> Serguéi Zamaschikov, “The role of the military in the social integration of ethnic muslims in the USSR”, *Radio Liberty Research* (23 de diciembre de 1983).

<sup>13</sup> N.V. Ogarkov, *Vsegda v gotovnosti k zashchite otechestva* (Voenizdat, Moscú, 1982), pág. 64.

<sup>14</sup> Zamaschikov, op. cit.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

Por otra parte, mientras algunos autores han relacionado la extensión de las “novatadas” con enfrentamientos interétnicos, Jones ha señalado que estos últimos merecían una atención mucho menor que la que reclamaban, por ejemplo, las conductas comúnmente exhibidas por los soldados más veteranos en su relación con los reclutas noveles. En estrecha relación con lo anterior hay que recordar que una tesis común entre los especialistas occidentales es la que apunta que algunas minorías étnicas, consideradas poco dignas de confianza, han sido objeto de una abierta discriminación que, entre cosas, ha condenado a sus integrantes a la realización de tareas de segundo orden o al alejamiento de los teóricos puestos de combate. Una idea muy común es la que argumenta que el ejército del aire, la armada y las fuerzas de misiles estratégicos se han nutrido fundamentalmente de eslavos, en tanto que la presencia de los otros grupos nacionales era más significativa en el ejército de tierra, así como en las unidades de ferrocarriles y de construcción. Las informaciones proporcionadas por ciudadanos soviéticos que habían realizado el servicio militar antes de trasladarse al exterior parecen señalar, sin embargo, que ninguna nacionalidad —incluidos alemanes, judíos o habitantes del Asia central— experimentaba marginación en lo que respecta a su asignación a puesto alguno<sup>16</sup>. Aunque en 1982 *Krásnaya zvezdá* apuntaba que había llegado a su fin la edad de la división de nacionalidades y repúblicas en categorías, unos años después en las páginas del mismo diario se parecía reconocer de manera implícita que lo anterior no se había hecho plena realidad: uno de sus periodistas señalaba que era frecuente que los reclutas uzbekos fueran destinados, sin remisión, al ejército de tierra y a los batallones de construcción<sup>17</sup>.

Las propias informaciones que dan cuenta de la política de distribución espacial de los soldados parecen desmentir las tesis que identifican el empleo de criterios selectivos discriminatorios. Jones señala que, aunque es cierto que el régimen soviético ha conservado una política de asignación de reclutas a zonas alejadas de su lugar de origen, no lo es menos que los motivos que estaban en el origen de la adopción de esa política no remitían *per se* a cuestiones nacionales o étnicas. Entre ellos se contaban la ruptura de aislamientos regionales, la voluntad de obligar a los soldados de origen rural a adaptarse a un medio urbano (y viceversa), la prevención de desertiones y otras faltas... A buen seguro que las autoridades han dudado también de la fiabilidad de los soldados en lo que respecta a la represión de la población en sus lugares de origen<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> V. Richard A. Gabriel, *The Mind of the Soviet Fighting Man* (Greenwood, Westport, 1984), págs. 10, 53 y 96.

<sup>17</sup> Zamaschikov, op. cit.: *Krásnaya zvezdá* (31 de mayo de 1990).

<sup>18</sup> Jones, pág. 195.

## II. Fuerzas armadas, cuestión nacional y reformas (1985-1991)

Son muchas las declaraciones de miembros de la cúpula militar que, en los últimos años ochenta, han expresado inquietud ante el auge de las reivindicaciones nacionalistas, por lo general consideradas consecuencia no deseada del proceso de reformas iniciado en 1985. La mayor parte de las argumentaciones utilizadas hacen referencia al carácter no constitucional de muchos de los principios, y de muchas de las políticas, respaldados por los movimientos nacionalistas. En las palabras del ministro de Defensa, Yázov, referidas al Báltico, “el proceso de reestructuración estimuló el crecimiento de la conciencia nacional en los pueblos de esas repúblicas. Fuerzas separatistas de inclinación nacionalista, que han adoptado el camino de las acciones anticonstitucionales, están intentando sacar partido de ello”<sup>19</sup>. Frente a estas concepciones, la reflexión más común entre los miembros de la cúpula militar fue la que apuntaba la necesidad de mantener la Unión, aun cuando se aceptasen transformaciones sustanciales en lo que a la naturaleza de ésta respecta. Baste con recordar el apoyo que las fuerzas armadas dispensaron al voto afirmativo en el referéndum sobre la Unión celebrado el 17 de marzo de 1991.

No hay que olvidar, por otra parte, que en la mayoría de los casos las reivindicaciones nacionales tuvieron pronto una dimensión relacionada con las fuerzas armadas, plasmada en demandas que abarcaban, según momentos y ambiciones, desde la realización del servicio militar dentro de las fronteras propias y la introducción de un servicio civil alternativo hasta la constitución de auténticos ejércitos republicanos. En este examen de los problemas que han vinculado a las fuerzas armadas con el resurgir nacionalista nos ocuparemos, en primer lugar, de las conflictivas relaciones que en ocasiones se han hecho notar entre los militares y las autoridades republicanas y sus apoyos populares. A continuación analizaremos el papel que las fuerzas armadas han desempeñado en algunas operaciones de control y represión en repúblicas de la periferia, para prestarle atención más adelante a tres problemas que guardan evidente relación con la configuración de las fuerzas armadas: la creación de milicias territoriales, la aparición de “ejércitos nacionales” y el incremento de la objeción de conciencia al servicio militar, fenómeno estrechamente vinculado con el resurgimiento nacionalista. Nuestro examen concluirá con un análisis de las previsiones que el fallido Tratado de la Unión incluía en relación con las fuerzas armadas.

### *(a) Políticas republicanas y fuerzas armadas*

El renacimiento de las reivindicaciones nacionalistas en un buen número de las repúblicas soviéticas ejerció pronto sus efectos sobre la percep-

---

<sup>19</sup> *Krásnaya zvezdá* (3 de junio de 1990).

ción que la cúpula de las fuerzas armadas exhibía en lo que respecta a los problemas de la Unión. Probablemente no es precipitado afirmar que casi siempre que desde esa cúpula se hacía referencia a la aguda crisis que atravesaba el sistema soviético, la perspectiva de un desmembramiento del Estado plurinacional estaba en el núcleo de las inquietudes.

En algunos casos los militares han llamado la atención sobre la “actividad destructiva” desplegada contra el PCUS, en cuyo seno se ha señalado, sin embargo, eran muchos los que “se han alineado cada vez más estrechamente con las fuerzas separatistas, nacionalistas y extremistas”<sup>20</sup>. Han rechazado también las acusaciones, contra ellos vertidas, de violación de la Constitución y de actuación violenta con ocasión de los conflictos internos. El responsable de la Administración Política Principal, coronel general Shliaga, apuntaba al respecto en 1991: “Los militares no se proponen en el ejercicio de sus funciones, y sus acciones son legales. Todas las acusaciones de crueldad dirigidas contra ellos carecen de fundamento y se basan en rumores o falsos testimonios”<sup>21</sup>. El ministro de Defensa, Yázov, por su parte, ha subrayado en más de una ocasión que “los acontecimientos en Tbilisi, Bakú y Vilnius (de ellos nos ocuparemos más adelante) son utilizados con frecuencia como excusa para desarrollar campañas contra el ejército. La participación de unidades militares en esos sucesos ha sido a menudo objeto de distorsión por fuerzas nacionalistas y destructivas y por algunos medios de comunicación”<sup>22</sup>. Yázov ha afirmado también que, aunque todo el mundo rechazaba la presencia de las fuerzas armadas en el apaciguamiento de los conflictos étnicos, pocos dudaban de las consecuencias previsibles de su retirada<sup>23</sup>. La reivindicación del papel de la ley ha sido común, por otra parte, en las muchas declaraciones del mariscal Ajroméyev, que es quien, entre los miembros de la cúpula militar, parece haber defendido posiciones más dialogantes en relación con los problemas nacionales, y ello pese a concederle al “centro” capacidades omnímodas de decisión al respecto: “El derecho de autodeterminación, hasta llegar a la secesión, está contenido en nuestra Constitución, y existe una ley que establece la forma de ejercerlo (...). Si se desarrolla un proceso de secesión, debe llevarse adelante de manera gradual para hacer posible la resolución de todos los problemas”<sup>24</sup>. Bien es cierto que, ante el desarrollo de los acontecimientos, no han faltado tampoco opiniones que han sugerido la necesidad de pasar a la acción. Así, el propio mariscal Ajroméyev señaló en su momento la necesidad de hacer respetar el artículo 31 de la Constitución de la URSS, que encomendaba a las fuerzas

---

<sup>20</sup> Yázov, en *Krásnaya zvezdá* (2 de abril de 1991).

<sup>21</sup> *Tass* (15 de abril de 1991), en *FBIS-SOV* (16 de abril de 1991).

<sup>22</sup> *Krásnaya zvezdá* (16 de mayo de 1991).

<sup>23</sup> *Komsomólskaya pravda* (22 de junio de 1991).

<sup>24</sup> *La Repubblica* (27 de abril de 1991).

armadas la defensa de la integridad del país<sup>25</sup>. En una carta publicada en *Krásnaya zvezdá* por un grupo de oficiales destinados en el Báltico se apuntaba que “si no se adoptan las medidas apropiadas, nos veremos en la obligación de defendernos a nosotros mismos y a nuestras familias, de defender nuestro honor y dignidad”<sup>26</sup>. En el mismo orden de cosas, en marzo de 1991 tres viceministros de Defensa realizaron por la televisión oficial un llamamiento en el que subrayaban que las fuerzas armadas no aceptarían la secesión de ninguna de las repúblicas de la Unión<sup>27</sup>.

En 1990 y 1991 se hicieron frecuentes, por otra parte, denuncias de acosos y daños padecidos por miembros e instalaciones de las fuerzas armadas. Esas denuncias vinculaban casi siempre las agresiones a conflictos nacionales o étnicos. Como botón de muestra baste con mencionar los comentarios que el coronel Krivoshéyev argüía en las páginas de *Krásnaya zvezdá*, llamando la atención sobre una larga lista de incidentes acaecidos en el Báltico<sup>28</sup>. Krivoshéyev agregaba que eran numerosos los intentos “de desmoralizar a los oficiales (...). A sus familias se les crean artificialmente dificultades en su vida cotidiana, al tiempo que se introducen restricciones discriminatorias en el cambio de los bonos que dan derecho a comida y a productos industriales, en el registro de las viviendas que ya han sido asignadas, en los servicios médicos y en la provisión de empleos”<sup>29</sup>. A principios de 1991 Yázov se ocupó también de la situación de más de 20.000 veteranos de las fuerzas armadas residentes en Vilnius, la capital de Lituania: “Han sido privados de sus derechos y privilegios en lo que respecta a la obtención de víveres, a la recepción de tratamiento médico y al empleo del transporte público. Casi seiscientas mujeres, esposas y familiares de militares, han perdido sus puestos de trabajo en Lituania por no conocer la lengua local. A más de un centenar de niños se les ha negado la admisión en centros preescolares, simplemente por ser hijos e hijas de miembros de las fuerzas armadas. A más de trescientas familias de militares se les ha negado el certificado de residencia”<sup>30</sup>. El propio Yázov acusaba más adelante a las autoridades republicanas del Báltico de no hacer frente a sus obligaciones en materia de construcción de viviendas<sup>31</sup>. Entre las medidas adoptadas para hacer frente a esta situación se contaba, por cierto, la autorización para portar armas concedida en diciembre de 1990 al personal militar presente en determinadas áreas, no especificadas, del país<sup>32</sup>.

---

<sup>25</sup> *Nóvoye vrenia* (nº 6, 1991), pág. 15.

<sup>26</sup> *Krásnaya zvezdá* (19 de enero de 1991).

<sup>27</sup> *El País* (14 de marzo de 1991).

<sup>28</sup> *Krásnaya zvezdá* (8 de junio de 1990).

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> Discurso en la televisión soviética el 14 de enero de 1991, en *FBIS-SOV* (15 de enero de 1991).

<sup>31</sup> *Krásnaya zvezdá* (13 de abril de 1991).

<sup>32</sup> *Izvestia* (31 de diciembre de 1990).

*(b) El empleo de las fuerzas armadas en tareas de control y represión*

Probablemente fueron los violentos enfrentamientos étnicos registrados entre uzbekos y turcos mesjetas en Ferganá (Uzbekistán), a mediados de 1989, los primeros en los que se hizo evidente la utilización de las fuerzas armadas con fines represivos. Esta alcanzó una mayor espectacularidad, sin embargo, en enero de 1990, con ocasión de los disturbios de Sumgait, en Azerbaiyán, y tras la instauración del estado de emergencia ante la perspectiva de una guerra abierta entre azeríes y armenios. Desde entonces la presencia de unidades militares entre los bandos contendientes ha sido común en la república mencionada y en la vecina Armenia —que se disputan el enclave de Nagorno-Karabaj—, así como en la también caucásica república de Georgia, en la que se ha hecho sentir el enfrentamiento entre las autoridades republicanas y la población de Osetia del Sur. Con posterioridad a estos acontecimientos, y ya en 1991, el ejército corrió a cargo de determinadas tareas de represión y control en el Báltico.

Los acontecimientos de Azerbaiyán sirvieron para dejar constancia, por vez primera, de las debilidades del sistema de movilización aplicado<sup>33</sup>. La decisión de trasladar a la zona de conflicto unidades supuestamente “seguras”, formadas por reclutas procedentes del sur de Rusia, chocó inmediatamente con la resistencia de muchos de los padres de los mismos, que temían la repetición de la todavía caliente historia afgana. El resultado no fue otro que una vuelta atrás por parte de los responsables militares, que revocaron su decisión inicial. A lo largo de 1990, y en relación con este mismo problema, el Ministerio de Defensa abrió la posibilidad de un servicio militar de carácter voluntario, reportador de ventajas de diferente orden, en las zonas conflictivas, y particularmente en el Cáucaso<sup>34</sup>.

Aparte lo anterior, los enfrentamientos en Azerbaiyán, y la subsiguiente acción militar, sirvieron para que el ministro de Defensa adoptase una posición manifiestamente beligerante en contra del Frente Popular local, al que estimaba responsable de lo sucedido. Con posterioridad, Yázov no dudó en respaldar abiertamente acciones militares de corte semejante, como la que tuvo por escenario Novochoerkassk en 1962<sup>35</sup>. La actitud del ministro de Defensa quedaba bien reflejada en su respuesta, a finales de 1990, a una pregunta sobre la participación de las fuerzas armadas en la resolución de conflictos étnicos: “Cuantas menos tareas sean asignadas al ejército, mejor. Pero no creo que sea bueno que, en caso de derramamiento de sangre, el ejército se mantenga al margen”<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Harry Gelman, “Gorbachev and the Future of the Soviet Military Institution”, en *Adelphi Paper* (nº 258, 1991), pág. 34.

<sup>34</sup> *Izvestia* (1 de enero de 1991).

<sup>35</sup> *Literatúrnyaya gazeta* (12 de septiembre de 1990).

<sup>36</sup> *Krásnaya zvezdá* (21 de diciembre de 1990).

Fue en Georgia en donde, el 8 y el 9 de abril de 1989, se produjo el más controvertido de los asuntos en los que las fuerzas armadas intervinieron de manera violenta, al reprimir en Tbilissi una manifestación realizada en solidaridad con un grupo de huelguistas de hambre que reivindicaban la independencia para la república. La acción, con empleo de gas y de bayonetas, se saldó con una veintena de muertos. Días después el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, Edvard Shevardnadze, de nacionalidad georgiana, señaló que la orden de reprimir violentamente la manifestación fue dada por las autoridades republicanas —no por las autoridades de la Unión—, desoyendo el consejo del comandante del distrito militar del Transcaucaso, coronel general Rodiónov<sup>37</sup>. Este último atribuyó la acción a las tropas del Ministerio del Interior, exonerando al ejército de responsabilidad alguna. Algunas de las explicaciones oficiales de los primeros momentos —así, las que señalaban que no se habían utilizado gas lacrimógeno y bayonetas, y que las víctimas lo habían sido por simple aglomeración de personas— hubieron de ser objeto de posterior desmentido.

Una subcomisión del Soviet Supremo de Georgia se ocupó de recordar más adelante que la decisión de utilizar tropas regulares para reprimir una manifestación sólo podía haberse adoptado en virtud de la instauración de la ley marcial o de un estado de emergencia, competencia exclusiva del Soviet Supremo de la URSS; el empleo de fuerzas del Ministerio del Interior reclamaba, entre tanto, la autorización expresa de éste. La subcomisión concluyó que la decisión de reprimir la manifestación correspondió por igual a los dirigentes republicanos y a los responsables de las fuerzas armadas, y entre ellos el propio ministro de Defensa.

Al tiempo que se hacían notar otras informaciones e interpretaciones —se daba cuenta, por ejemplo, de una reunión del Politburó en Moscú, presidida por Yégor Ligachov, el 7 de marzo, y se sugería que los dirigentes georgianos habían exagerado los peligros derivados de la situación y que los responsables militares locales se habían excedido en la aplicación de las órdenes recibidas—, el Congreso de Diputados Populares de la Unión establecía también una comisión especial de investigación sobre los sucesos de Tbilissi; la resolución finalmente aprobada criticaba la incapacidad de los dirigentes georgianos para resolver la situación de manera pacífica, apuntaba errores de los mismos, y de las autoridades de Moscú, en la forma de poner fin a la manifestación, y subrayaba la inexistencia de un marco legal en que pudiera sustentarse el empleo de las fuerzas armadas en situaciones como la de Tbilissi. El discurso pronunciado por el presidente de la comisión, Anatolii Sobchak, refería que en la reunión del Politburó antes mencionada se decidió el envío de tropas del Ministerio del Interior, de las fuerzas armadas y de los cuerpos especiales de policía,

---

<sup>37</sup> V. Gerard Holden, *Soviet Military Reform* (Pluto-TNI, Londres, 1991), pág. 114 y ss.

otorgando siempre prioridad, sin embargo, a la resolución pacífica de las tensiones, y señalando que las unidades militares sólo debían entrar en acción en caso de graves desórdenes. La decisión de disolver la manifestación, según Sobchak, correspondió al Politburó georgiano con participación de los generales Rodiónov y Kóchetov. El plan no se modificó pese al elevado número de personas presentes en la plaza en que se desarrollaron los incidentes. Siempre de acuerdo con el informe de Sobchak, los soldados no disponían del material adecuado, y su acción entraba en abierta colisión con las órdenes recibidas, que tan sólo facultaban para responder a una agresión.

El fiscal militar encargado de perseguir a los presuntos culpables, que había desarrollado una investigación propia, llegó a la conclusión de que la acción de las tropas estaba justificada, circunstancia que provocó una amenaza de dimisión por parte del ya citado Shevardnadze. El juicio del fiscal militar sirvió, de cualquier forma, para que miembros de la cúpula de las fuerzas armadas, encabezados por el propio ministro de Defensa, responsabilizaran de lo ocurrido a los nacionalistas georgianos: “Hay que decir en voz alta y con claridad que el ejército no tuvo la culpa. Los culpables son los que han llegado al poder. Desde su posición de ahora disparan todos los días. Se ha derramado sangre en Osetia del Sur y nadie parece preocuparse”<sup>38</sup>. Intentando exonerar a las fuerzas armadas de cualquier culpa, en fin, el mariscal Ajroméyev atribuyó al Politburó —el del PCUS— la decisión de hacer intervenir al ejército<sup>39</sup>.

Otro significado escenario de utilización de las fuerzas armadas con fines represivos fue el Báltico. A principios de 1991 unidades militares y fuerzas del Ministerio del Interior ocuparon instalaciones de la televisión y otros edificios públicos en Lituania, Letonia y Estonia<sup>40</sup>. En un marco en el que se hizo frecuente la identificación de las fuerzas armadas soviéticas como un “ejército de ocupación”, el 10 de enero Gorbachov acusó al gobierno de la república de Lituania de programar el restablecimiento del “orden burgués”; al día siguiente se anunciaba la creación de un “Comité de Salvación Nacional” que se declaraba partidario de poner en manos del presidente de la Unión el gobierno de la república. En la noche del 12 al 13 de enero tropas regulares atacaron los edificios de la televisión y de la radio en Vilnius, la capital lituana, y provocaron la muerte de varios civiles.

Los acontecimientos lituanos tuvieron su repetición en Letonia unos días después, tras la aparición de un nuevo “Comité de Salvación”. Cuatro personas murieron como consecuencia de un ataque asestado por tropas

<sup>38</sup> Declaraciones en la televisión soviética el 30 de marzo de 1991, en *FBIS-SOV* (1 de abril de 1991).

<sup>39</sup> *La Repubblica* (27 de abril de 1991).

<sup>40</sup> V. Gerard Holden, “The Road to the Coup: Civil-Military Relations in the Soviet Crisis”, en *PRIF Reports* (nº23, Frankfurt, 1991), pág. 16 y ss.

del Ministerio del Interior sobre el edificio del ministerio correspondiente de la república de Letonia. Tras una activa resistencia popular, acompañada de una no menos activa reacción internacional, la vida retomó su normalidad a finales de enero, cuando las fuerzas de seguridad abandonaron los edificios ocupados.

Tanto el presidente Gorbachov como los ministros de Defensa y del Interior de la Unión, Yázov y Pugo, negaron que desde Moscú se hubieran impartido órdenes que autorizaran el uso de la fuerza. Los tres responsables mencionados señalaron que las autoridades militares locales habían actuado en Lituania tras hacerse notar una petición en ese sentido realizada por el Comité de Salvación Nacional. De acuerdo con la versión oficial, las fuerzas armadas se habían limitado a repeler el fuego que se había realizado sobre ellas, versión de los hechos no ratificada por ninguno de los periodistas extranjeros presentes sobre el terreno. La versión oficial fue respaldada en el informe que al efecto emitió, en junio de 1991, el fiscal general de la URSS, quien agregó que las muertes no habían sido causadas por acciones militares, y si por accidentes de tráfico y disparos realizados por los nacionalistas lituanos.

Sean como sean las cosas, siguen siendo muchas las incógnitas que rodean a los acontecimientos de Vilnius. Gerard Holden ha señalado al respecto que “si Gorbachov ordenó realmente que el ejército y las fuerzas del Ministerio del Interior restablecieran la autoridad central con independencia del coste de la operación en vidas, el intento parece haberse desarrollado con una pobre coordinación y escasa decisión, muy lejos del empleo de la fuerza en gran escala que hubiera sido necesario para derrocar a los gobiernos del Báltico. Si, por el contrario, no emitió órdenes para ello o lo hizo con la vista puesta en una operación más limitada, la única conclusión que puede extraerse es que las fuerzas de seguridad actuaron al margen del control central. Yázov a punto estuvo de respaldar esta versión cuando admitió no conocer la identidad de los miembros del Comité de Salvación Nacional, aun señalando que el comandante de la guarnición local se había comportado de manera adecuada al apoyarlo frente a la dirección lituana”<sup>41</sup>. Durante los primeros meses de 1991 fueron muchos, por lo demás, los rumores que apuntaban a un incremento en el número de soldados presentes en el Báltico; esos rumores recibieron constantes desmentidos por parte de los responsables militares<sup>42</sup>, quienes subrayaron que sólo se habían trasladado fuerzas de paracaidistas cuyo objetivo era garantizar el cumplimiento de las normas sobre servicio militar obligatorio<sup>43</sup>.

Las operaciones que tuvieron las repúblicas bálticas como escenario suscitaron comentarios muy agrios del presidente del Soviet Supremo de

---

<sup>41</sup> Holden, “The Road...”, pág. 17.

<sup>42</sup> Del desmentido de Moiséyev se hace eco *Tass* (4 de enero de 1991), en *FBIS-SU* (7 de enero de 1991).

<sup>43</sup> *Soviétskaya Rossiya* (10 de enero de 1991).

la Federación Rusa, Borís Yeltsin, quien entre otras cosas alentó a los soldados rusos para que se negaran a disparar y viajó al Báltico con objeto de firmar un acuerdo en virtud del cual su Federación se comprometía a no participar en acciones punitivas<sup>44</sup>. Sus palabras recibieron inmediatas críticas, de entre las que destacan las vertidas por un grupo de militares veteranos que, encabezado por el mariscal Kulikov, publicó en *Soviétskaya Rossiya* una carta en la que señalaba que los soldados que siguieran el consejo de Yeltsin traicionarían “a sus comandantes, a sus jefes y a los camaradas que representan a otras repúblicas, entrando en conflicto con su conciencia y con las leyes soviéticas”<sup>45</sup>. En algunos casos las denuncias militares elevaron sensiblemente su tono, como lo ilustra la carta de otro grupo de veteranos de guerra que apareció en un periódico kazajo: “Todas las fuerzas antisoviéticas se han movilizado para atribuir la responsabilidad de los acontecimientos de Vilnius —provocados por Landsbergis, el genuino continuador de la causa de su padre, un colaborador de los agresores germanofascistas, que en la práctica ya ha asestado un golpe burgués en Lituania— a nuestros hombres, considerados fuerzas de ocupación en ésta y en las restantes repúblicas bálticas. Este insulto blasfemo contra la memoria de centenas de millares de soldados soviéticos que dieron sus vidas por la liberación del Báltico no ha provocado indignación alguna en Borís Yeltsin, quien es indiferente también al destino de los rusoparlantes y de otros habitantes de las repúblicas”<sup>46</sup>.

### (c) La polémica sobre las “milicias territoriales”

Junto a las propuestas de creación de un ejército profesional, el otro gran foco de debate sobre el futuro de las fuerzas armadas ha sido el que se ha ocupado de una posible reconfiguración de su naturaleza espacial, de la mano de un sistema de milicias territoriales. El principal defensor de este tipo de formaciones ha sido en los últimos años el coronel Vladímir Lopatin, principal responsable, en el otoño de 1990, de la redacción de un proyecto de reforma militar alternativo al del Ministerio de Defensa. Para Lopatin, “las formaciones nacional territoriales (...) deben estar subordinadas a los dirigentes centrales y locales, aun cuando en términos operacional-estratégicos lo estén únicamente al centro. En situaciones extremas, y en virtud de una decisión de los dirigentes locales, pueden ser utilizadas para afrontar los efectos de desastres naturales o poner fin a disturbios en localidades concretas”<sup>47</sup>. En el proyecto de reforma militar mencionado, Lopatin sugería, por añadidura, la constitución de un sistema de reservas con arreglo al principio territorial<sup>48</sup>. En cierta forma, y en otro plano, este tipo de propuestas ha tenido un efecto de contrapeso de aquéllas que remi-

<sup>44</sup> Holden, “The Road...”, pág. 24.

<sup>45</sup> *Soviétskaya Rossiya* (31 de enero de 1991).

<sup>46</sup> *Kazaistánskaya pravda* (23 de enero de 1991), en *FBIS-SOV* (19 de marzo de 1991).

<sup>47</sup> *Znamia* (nº7, julio de 1990).

<sup>48</sup> *Pravítelstvennii vestnik* (nº48, noviembre de 1990).

tían al establecimiento de un ejército profesional, toda vez que por lo común reclamaban la conservación de un servicio obligatorio y no remunerado. Aunque la reacción de los portavoces del Ministerio de Defensa fue siempre reacia a aceptar la perspectiva de creación de unidades como las que nos ocupan, algunas de las medidas adoptadas pueden interpretarse como un esfuerzo de aproximación a ese modelo. Fue el caso, en particular, de la decisión de permitir el incremento del número de reclutas que debían realizar el servicio militar en su república de origen.

Pese a lo anterior, la reacción de la cúpula militar ante la perspectiva de una territorialización de las fuerzas armadas fue negativa. El propio Yázov se opuso en su momento al desarrollo de un sistema de milicias territoriales, argumentando al efecto los problemas que de él se derivarían en términos de formación en el empleo de armas complejas, flexibilidad geográfica, disciplina y “exacerbación de las relaciones interétnicas”<sup>49</sup>. Bien es cierto que Yázov no condenó de manera tajante las propuestas de territorialización; muy al contrario, subrayó el importante papel desempeñado por las “formaciones nacionales” en otros momentos de la historia del Estado soviético. Algún portavoz militar llamó la atención, por otra parte, sobre lo que se estimaba era un paso atrás, toda vez que en Occidente los movimientos que se adoptaban apuntaban más bien a la configuración de “sistemas colectivos de seguridad, incluidas defensas áreas unificadas”<sup>50</sup>.

No faltaron tampoco críticas que planteaban los problemas lingüísticos y de socialización que podrían derivarse: mientras el ruso perdería terreno como lengua común, el papel de las milicias territoriales en caso de conflictos nacionales sería ambiguo. El propio ministro de Defensa sugirió —unas líneas antes lo hemos señalado— que la creación de esas milicias podía hacer que los conflictos interétnicos desembocasen en auténticas guerras fratricidas. Más allá de todo lo anterior, al abrigo de la proliferación de unidades territoriales se vendría abajo la ficción de la integración étnica en un ejército común. Otros portavoces significados —así, el jefe de Estado Mayor, general Moiséyev<sup>51</sup>— se interrogaron, con cierta carga retórica no exenta de ironía, por la naturaleza de los presuntos enemigos a los que las formaciones territoriales debían hacer frente.

En algún caso se subrayó, en suma, el coste económico, estimado muy alto, de la creación de las nuevas unidades. Así, un grupo de “científicos militares” publicó en *Krásnaya zvezdá* un texto en el que se referían los elevados costes derivados de la creación de una formación nacional en Armenia, mientras que una estimación semejante sobre Lituania fue reali-

<sup>49</sup> *Krásnaya zvezdá* (7 de marzo y 13 de abril de 1989; 5 de junio de 1990).

<sup>50</sup> Coronel general Litvinov, en *Krásnaya zvezdá* (25 de junio de 1991).

<sup>51</sup> *Izvestia* (23 de diciembre de 1990).

zada en su momento por el coronel general Achálov<sup>52</sup>. También se llamó la atención, por último, sobre el incremento de los problemas que la aparición de este tipo de unidades acarrearía en lo que respecta al cumplimiento de los acuerdos de control de armamentos<sup>53</sup>.

*(d) La aparición de unidades armadas en las repúblicas soviéticas*

En paralelo con el debate anterior se verificaba la aparición de unidades militares que, al margen de las fuerzas armadas soviéticas, veían la luz, en el Cáucaso y en Moldavia, en el marco de agudos enfrentamientos étnicos. Muchos de los miembros de estas unidades parecían ser desertores del ejército soviético; el armamento, por su parte, procedía también, en su mayoría, de aquél. En marzo de 1991 el mayor general Gorbatko refería el crecimiento del número de robos de armas y señalaba que la sustracción de un 47% de éstas era producto de “ataques piratas” que producían víctimas entre los centinelas de los cuarteles<sup>54</sup>. El coronel Zajarchenko señalaba, a su vez, la preocupación suscitada por “la producción casera de fusiles de asalto y pistolas realizada bajo la supervisión de especialistas cualificados”<sup>55</sup>. Pese a los esfuerzos realizados por Gorbachov, quien a finales de 1990 ordenó la disolución de las unidades que nos ocupan<sup>56</sup>, su actividad pervivió, ocasionando notorios problemas de disciplina en el seno de las fuerzas armadas.

Sin mayores efectos reales, en otras repúblicas se creaban comités cuyo propósito era alentar la configuración de ejércitos propios. Es el caso de las autodenominadas “Fuerzas armadas ucranianas”, que pretendían organizarse en las regiones occidentales de la república de Ucrania; de varios destacamentos en Estonia, y de otras iniciativas en Lituania y Letonia. En la mencionada Ucrania el parlamento adoptó en julio de 1990 una declaración de soberanía que enunciaba el derecho de la república a mantener un ejército propio; el ejemplo ucraniano fue imitado pronto por Bielorrusia<sup>57</sup>. En las declaraciones de soberanía emitidas por otras repúblicas —así, Armenia, Georgia, Moldavia y Lituania— se invocaba también el establecimiento de fuerzas armadas nacionales.

Con objetivos menos ambiciosos, la Federación Rusa dio algunos pasos que se ocupaban de la perspectiva de reducciones en los niveles de tropas dentro de la Federación, del establecimiento de garantías legales de los intereses de los militares ante la instauración de una economía de mercado, y del desarrollo de medidas de ayuda ante una eventual desmoviliza-

---

<sup>52</sup> *Krásnaya zvezdá* (23 de enero de 1991); *FBIS-SOV* (20 de junio de 1991).

<sup>53</sup> Yázov, en *Pravda* (9 de mayo de 1991).

<sup>54</sup> *Soviétskaya Rossiya* (26 de marzo de 1991).

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> *Krásnaya zvezdá* (2 de diciembre de 1990).

<sup>57</sup> *Krásnaya zvezdá* (8 de junio de 1990); Holden, “The Road...”, págs. 20 y 22.

ción<sup>58</sup>. En febrero de 1991 se constituyó en el marco del gobierno de la Federación un Comité de Estado para la Defensa y la Seguridad entre cuyos cometidos parecían encontrarse tareas de defensa territorial, de preparación para el servicio militar, de desarrollo del sistema de conscripción, de resolución de problemas sociales de los militares y de puesta en práctica de fórmulas de defensa civil<sup>59</sup>. A principios de 1991 Yeltsin se pronunció por la creación de unas fuerzas armadas de Rusia, circunstancia que más adelante se encargaría de desmentir. Alguno de sus colaboradores, como el general Volkogónov, subrayó con posterioridad que el propósito no era crear un ejército ruso, sino hacer más eficientes y democráticas las fuerzas armadas del Estado soviético<sup>60</sup>.

La cúpula militar contestó con dureza en muchas ocasiones la formación de ejércitos republicanos. Interrogado a finales de 1990 por la perspectiva de que una república decidiera no suscribir el Tratado de la Unión y, a continuación, optase por crear unas fuerzas armadas propias, el jefe del Estado Mayor, Moiséyev, respondió: “Si tal cosa sucede, la separación de una simple rama de las fuerzas armadas con respecto al sistema común de dirección conducirá a la destrucción de todo el mecanismo de garantías de seguridad. Desde mi punto de vista sería un movimiento precipitado. Pienso que la razón prevalecerá”<sup>61</sup>. En otros casos se subrayaban las dificultades presuntamente asociadas con la operación de división de unas fuerzas armadas únicas. Así, el mayor Zeyéglov señalaba en marzo de 1991: “¿Cómo dividiremos los buques y submarinos de nuestra armada? ¿En proporción al tamaño de la población o al territorio de cada nuevo Estado?”<sup>62</sup>. No faltaron tampoco opiniones que, como la del viceministro de Defensa, Varénnikov, relacionaban el peso histórico de Rusia con la preservación de unas fuerzas armadas únicas<sup>63</sup>.

El antes mencionado anuncio de Yeltsin en el sentido de propiciar la creación de unas fuerzas armadas rusas suscitó, por otra parte, la reacción airada de muchos militares. Así lo pusieron de manifiesto las declaraciones del mariscal Kulikov, quien calificó de “traidor” al presidente ruso<sup>64</sup>. Otro tanto puede decirse de la carta abierta de oficiales destinados en el Báltico y del manifiesto de científicos militares, publicados ambos en *Krásnaya zvezdá* en enero de 1991, y de la proclama que un grupo de militares de la guarnición de Moscú suscribió en febrero del mismo año<sup>65</sup>.

<sup>58</sup> IAN Press Release (11 de diciembre de 1990), en FBIS-SOV (18 de diciembre de 1990).

<sup>59</sup> *Krásnaya zvezdá* (21 de febrero de 1991).

<sup>60</sup> *Le Monde* (9 de mayo de 1991).

<sup>61</sup> *Izvestia* (23 de diciembre de 1990).

<sup>62</sup> *Krásnaya zvezdá* (15 de marzo de 1991).

<sup>63</sup> FBIS-SOV (23 de abril de 1991).

<sup>64</sup> *El País* (1 de febrero de 1991).

<sup>65</sup> *Krásnaya zvezdá* (22 y 23 de enero, y 26 de febrero de 1991).

*(e) Objeción de conciencia y cuestión nacional*

La extensión de la objeción al servicio militar, en muy estrecha relación con la manifestación de tensiones nacionales, ha sido uno de los principales motivos de preocupación de los militares soviéticos al menos en lo que respecta al período 1989-1991. Los datos no han dejado de reflejar un crecimiento sensible en el rechazo a la conscripción y una pérdida genérica de interés por el servicio de armas, reflejada en los resultados de muchas encuestas realizadas con jóvenes soviéticos<sup>66</sup>. En paralelo con estos sentimientos se identificaba un incremento en el número de conscriptos que procuraban servirse de distintos medios “legales” para esquivar el servicio militar.

En declaraciones realizadas a finales de 1990, el ministro de Defensa, Yázov, señaló que en 1985 se habían producido 600 casos de elusión de la conscripción, de los que 280 habían sido objeto de sanción penal; en 1987, las cifras correspondientes fueron de 1.000 y 250. El responsable de la Administración Política Principal, Shliaga, señaló, a su vez, que en 1988 habían sido 1.049 los jóvenes que habían eludido sus obligaciones. A finales de 1989 el jefe del Estado Mayor, Moiséyev, refería que eran 7.500 los ciudadanos soviéticos que se resistían a la conscripción, mientras que otra fuente identificaba 6.647 nuevos casos de rechazo del servicio a lo largo del mencionado 1989. El coronel general Grigorii Krivoshéyev apuntó en su momento, por su parte, que en 1989 el número de casos se había multiplicado por seis en comparación con el año anterior<sup>67</sup>.

Las primeras estimaciones detalladas de los niveles de resistencia a la conscripción aparecieron, sin embargo, en julio de 1990 en las páginas de *Krásnaya zvezdá*. Hacían referencia al grado de cumplimiento de los planes de reclutamiento de la primavera de 1990, que demostraba ser escaso en Armenia (7,5%), Georgia (27,5%), Lituania (33,5%), Estonia (40%) y Letonia (54%), repúblicas todas en las que ya en 1989 se habían hecho notar problemas. Los datos sobre el cumplimiento del plan del otoño reflejaban, de nuevo, situaciones críticas en el Báltico y en el Cáucaso. En la primera de esas áreas, y de acuerdo con el centro de prensa del Ministerio de Defensa, el plan se había satisfecho en un 25,5% en Letonia, un 24,5% en Estonia y un 12,5% en Lituania; sólo un 13% de los reclutas habían ingresado efectivamente en filas en Azerbaiyán, por un 28% en Armenia y un 10% en Georgia. La situación era también delicada en Moldavia (59%) y en varias zonas de la república de Ucrania. Por lo que se refiere, en fin, a la “campana” de la primavera de 1991, los datos reportados al efecto por el diario *Izvestia* reflejaban un grado de cumplimiento que se aproximaba

---

<sup>66</sup> V. la publicada en *Trud* (4 de agosto de 1990).

<sup>67</sup> *Krásnaya zvezdá* (21 de diciembre de 1990); *FBIS-SOV* (12 de junio de 1991); *RFE-RL Daily Report* (nº 243, 22 de diciembre de 1989); *Krásnaya zvezdá* (3 de junio de 1990); *TASS* (18 de septiembre de 1990), en *FBIS-SOV* (19 de septiembre de 1990).

al 100% en la Federación Rusa, Ucrania, Bielorrusia y Azerbaiyán. En otras repúblicas los resultados eran, sin embargo, manifiestamente deficientes: un 84,5% en Uzbekistán —con porcentajes similares en el resto del Asia central y en Moldavia—, un 31% en Letonia, un 30,5% en Estonia, un 16,5% en Armenia, un 12,5% en Lituania y un 8% en Georgia. *Izvestia* señalaba, por lo demás, que el plan de reclutamiento se había cumplido en un 91,5% de los casos, frente al 96,5% del año anterior<sup>68</sup>.

En paralelo con los procesos descritos empezó a cobrar cuerpo otro fenómeno que pronto suscitó la atención de los medios de comunicación: el abandono del servicio en filas, que a mediados de 1991 parecía haber sido la opción elegida por 5.500 soldados<sup>69</sup>. Particular resonancia tuvo esa conducta entre quienes prestaban sus servicios en unidades presentes en la Europa central y oriental. En octubre de 1990 la televisión soviética daba cuenta de la petición de asilo político en la República Federal de Alemania realizada por más de doscientos soldados<sup>70</sup>.

Más allá de estos datos hay que dejar constancia de las políticas de los gobiernos republicanos en relación con el problema de la objeción a la conscripción. Fueron varias las repúblicas cuyos soviets supremos le dieron carácter legal a la decisión de no acudir al llamamiento a filas. El 11 de marzo de 1990, el día siguiente a la declaración de independencia, quedó anulada en el territorio de Lituania la ley de servicio militar obligatorio vigente en la URSS; en julio del mismo año fue aprobada por el parlamento lituano una ley de servicio militar que permitía que todo ciudadano con 19 de años de edad cumplidos pudiera realizar el servicio militar en defensa de la república. El 11 de abril el Soviet Supremo de Estonia le dio curso a una ley en virtud de la cual la objeción de conciencia al servicio militar era despenalizada y se impartían a empresas y organizaciones instrucciones para que entraran en suspenso los procedimientos de conscripción. El 3 de mayo el Soviet Supremo de Armenia adoptó una resolución que suspendía, en espera de otras leyes, el servicio militar obligatorio en las fuerzas armadas soviéticas. El parlamento letón aprobó el 1 de marzo una ley sobre un servicio alternativo de carácter no militar, mientras Georgia, Ucrania y Moldavia promulgaban textos legales que parecían entrar en contradicción con la legislación oficial referida al servicio militar. Uzbekistán, entre tanto, adoptaba la decisión de no autorizar que los reclutas uzbekos realizaran su servicio en los destacamentos de construcción<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> *Krásnaya zvezdá* (12 de julio de 1990); *Tass* (7 de enero de 1991), en *FBIS-SOV* (8 de enero de 1991); *Tass* (20 de noviembre de 1990), en *FBIS-SOV* (21 de noviembre de 1991); *Tass* (7 de enero de 1991), en *FBIS-SOV* (8 de enero de 1991); *Izvestia* (11 de enero y 23 de julio de 1991).

<sup>69</sup> Shliaga, en *FBIS-SOV* (12 de junio de 1991).

<sup>70</sup> *FBIS-SOV* (9 de octubre de 1990).

<sup>71</sup> *El País* (19 de julio de 1990); N. Gross, "Boycott of the Spring 1990 Draft", en *Jane's Soviet Intelligence Review* (agosto de 1990); *Moskóvskíye nóvosti* (nº28, 14 de julio de 1991); *Krásnaya zvezdá* (9 de octubre de 1990); Holden, "The Road...", págs. 21 y 22; *Izvestia* (23 de julio de 1991).

Como puede apreciarse, fueron las repúblicas en las que los movimientos nacionalistas habían alcanzado una mayor importancia aquéllas en las que el rechazo al servicio militar era más notorio. Tal circunstancia no escapaba, por cierto, a la consideración de muchos militares. “Para nadie es un secreto que en algunas repúblicas los conflictos interétnicos han causado dificultades considerables (...). Se ha animado a los jóvenes a no presentarse y a hacer todo lo posible para evitar el servicio”<sup>72</sup>. El teniente general Serguéyev, responsable del distrito militar de Odessa, fue contundente en su momento a la hora de dar cuenta de la opinión que estos hechos suscitaban en la cúpula militar: las repúblicas pertenecen a la URSS y “la legislación de la Unión en materia de defensa tiene prioridad en cualquier Estado”<sup>73</sup>.

Al rechazo de la política respaldada por muchos movimientos nacionalistas se agregaba en algunos casos el lamento por la inoperancia de las organizaciones e instituciones llamadas a respaldar el mantenimiento del régimen de servicio militar obligatorio. Entre unas y otras era frecuente se citase al Komsomol y a las autoridades locales: “Incapaces de resistir frente a las organizaciones informales, a menudo abandonan el trabajo preventivo y la persecución de los delitos”<sup>74</sup>. Las críticas, que alcanzaban también a algunos medios de comunicación, llamaban la atención con frecuencia sobre los escasos esfuerzos realizados en lo que respecta a la persecución y castigo de los jóvenes afectados. A finales de 1990 el ministro de Defensa lamentaba que sólo un 30% de quienes se negaban a realizar el servicio militar eran objeto de procesamiento<sup>75</sup>. Otras informaciones reflejaban porcentajes aún más bajos; así, según el coronel Kozlov, adscrito al Directorado Político del distrito militar de Moscú, en éste tan sólo 30 de los 2.000 casos de elusión del servicio militar estaban siendo perseguidos<sup>76</sup>. De acuerdo con las palabras del coronel general Shliaga, un 13% de las “insumisiones” habían sido objeto de sanción penal en 1989, frente a un 0,5% en 1990<sup>77</sup>.

Con el propósito indudable de acabar con este estado de cosas, a principios de 1991 el Ministerio de Defensa anunció su decisión de utilizar unidades de paracaidistas para garantizar que el reclutamiento obligatorio se llevaba a efecto<sup>78</sup>. Tal decisión provocó inmediatamente reacciones contrarias entre quienes estimaban que el traslado de esas unidades a zonas conflictivas respondía al objetivo subterráneo de desarrollar una

---

<sup>72</sup> *Pravda* (16 de mayo de 1990).

<sup>73</sup> *Izvestia* (17 de octubre de 1990).

<sup>74</sup> *Krásnaya zvezdá* (8 de junio de 1990).

<sup>75</sup> *Krásnaya zvezdá* (21 de diciembre de 1990).

<sup>76</sup> *Izvestia* (30 de enero de 1991).

<sup>77</sup> *FBIS-SOV* (12 de junio de 1991).

<sup>78</sup> Ajroméyev en *FBIS-SOV* (10 de enero de 1991).

represión a gran escala, interpretación rápidamente negada por responsables militares<sup>79</sup>. En algún otro caso la política adoptada estribó en prolongar el tiempo de aplicación del reclutamiento; así, la “campaña de otoño” de 1990 en Moldavia fue prorrogada hasta el 1 de febrero de 1991<sup>80</sup>. Sin que las informaciones al respecto sean más prolijas, también es digna de mención la creación de un “punto de concentración de militares que abandonaron por propia voluntad el ejército”, uno de cuyos objetivos era permitir el examen de cada uno de los casos por juristas militares, médicos, oficiales y representantes sociales<sup>81</sup>. Es verdad, por último, que en el plano legal, y con la vista puesta en el futuro, se planteó la perspectiva de un “servicio alternativo”, como el que proponía crear el plan de reforma militar avalado a finales de 1990 por el Ministerio de Defensa para aquellos que no pudieran o no quisieran realizar el servicio ordinario por motivos religiosos u otras razones de conciencia<sup>82</sup>.

En las declaraciones de muchos portavoces militares se percibía, por añadidura, la inquietud suscitada por los problemas derivados de la falta de personal en las fuerzas armadas. Así, mientras el coronel general Shliaga evaluó en su momento en 360. 000 los puestos “no cubiertos”, el también coronel general Grinkevich elevó la cifra a 400. 000 —naturalmente, no todos ellos derivados de la “ insumisión” en curso— en comparación con las necesidades de aquéllas. El mayor general Kushoba señaló, a su vez, que muchos soldados se veían obligados a realizar trabajos adicionales, toda vez que sus unidades tan sólo contaban con un 80% del personal originalmente previsto<sup>83</sup>.

#### (f) Organización militar y Tratado de la Unión

A lo largo de buena parte de 1990, y durante los meses de 1991 anteriores al fallido golpe de Estado de agosto, sucesivos proyectos de un Tratado de la Unión fueron objeto de prolijas discusiones. Aún cuando estos proyectos exhibían diferencias sensibles, en términos generales reivindicaban cierto grado de descentralización en la toma de decisiones, acompañando del reconocimiento de varios derechos de las repúblicas: participación en el diseño de la política militar, resolución de problemas relativos al estacionamiento de tropas, determinación del número de reclutas y del nivel global de efectivos de las fuerzas armadas, y fijación del presupuesto de estas últimas, entre otros cometidos<sup>84</sup>. Esta concepción fue ratificada

<sup>79</sup> Así, el mayor general Manífov, en las páginas de *Soviétskaya Rossiya* (10 de enero de 1991).

<sup>80</sup> *Trud* (18 de enero de 1991).

<sup>81</sup> *Moskóvskiye nóvosti* (nº 27, 7 de julio de 1991).

<sup>82</sup> *Pravítelstvennii vestnik* (nº 48, noviembre de 1990).

<sup>83</sup> *FBIS-SOV* (12 de junio de 1991); *Izvestia* (5 de octubre de 1990); *Sélskaya zhizn* (12 de enero de 1991).

<sup>84</sup> I. Novosélov, en *Argumenti i fakti* (nº 40, 6-12 de octubre de 1990).

con posterioridad por el propio jefe del Estado Mayor, general Moiséyev, quien agregó que debían establecerse comités de defensa republicanos, entre cuyos objetivos se contarían la aplicación efectiva de las medidas adoptadas, el establecimiento de los contactos necesarios y la relación con los órganos federales<sup>85</sup>.

Pese a lo anterior, alguno de los miembros de la cúpula militar, y en particular el mariscal Ajroméyev, se ocupó en destacar los flujos de sentido contrario. Para Ajroméyev, el tratado que nos ocupa “señala que la función de la defensa del país (...) corresponde a los poderes de los cuerpos de la Unión”<sup>86</sup>, y las competencias que las repúblicas pueden recibir deben ser producto de una negociación entre ellas y la Unión, en el buen entendido de que queda al arbitrio de ésta la decisión final al respecto. Hay que mencionar, por lo demás, que algunos de los militares que representaban a los nuevos poderes republicanos aceptaban de buen grado que el “centro” se reservase un amplio espectro de competencias. Es el caso, en particular, del coronel general Kobets, presidente del Comité de Estado para la Defensa y la Seguridad creado por la Federación Rusa. Para Kobets debían ser competencia de la Unión “la seguridad del Estado, la organización de la defensa y la dirección de las fuerzas armadas, de las tropas de fronteras, las del Ministerio del Interior y las de ferrocarriles de la URSS, así como la declaración de la guerra y la firma de la paz”<sup>87</sup>.

El proyecto inicial del Tratado de la Unión, de noviembre de 1990, se caracterizaba ante todo por dejar en manos del gobierno central todos los aspectos relativos a la defensa, la política exterior y la gestión de la industria militar<sup>88</sup>. Como tal, el texto contestaba muchos de los principios implícitos en las declaraciones de soberanía que habían aprobado distintos parlamentos republicanos, circunstancia que pronto se hizo evidente de la mano de quejas emitidas desde Moldavia, Georgia y las tres repúblicas bálticas. El segundo proyecto, que vio la luz en marzo de 1991, se ocupaba de manera más prolija de lo que a la postre era un reparto de atribuciones entre el centro y las repúblicas: aunque la Unión seguía siendo responsable de la seguridad del Estado, de la organización de la defensa y de las actividades económicas anejas, el diseño de la política exterior debía ser conjunto, y otro tanto se preconizaba para la “estrategia de seguridad del Estado”, la “política militar” de la URSS y las decisiones referidas al estacionamiento de tropas y las instalaciones militares en las repúblicas; debía mantenerse, por otra parte, un sistema de reclutamiento común, sometido también a un acuerdo conjunto<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> *Tass* (15 de febrero de 1991), en *FBIS-SOV* (15 de febrero de 1991).

<sup>86</sup> *FBIS-SOV* (4 de diciembre de 1990).

<sup>87</sup> *Krásnaya zvezdá* (21 de febrero de 1991).

<sup>88</sup> *Krásnaya zvezdá* (24 de noviembre de 1990).

<sup>89</sup> *Izvestia* (9 de marzo de 1991).

A finales de abril de 1991 se hicieron notar novedades de la mano del llamado “acuerdo de Novo Ogariovo” o “acuerdo 9 + 1”, suscrito por Gorbachov y los presidentes de Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, la Federación Rusa, Tadjikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. El acuerdo prefiguraba un tercer proyecto de tratado que adquirió forma en el mes de junio y fue remitido para su discusión a los distintos soviets supremos<sup>90</sup>. Este proyecto se refería a las repúblicas como “estados soberanos” y reconocía su derecho a desarrollar políticas exteriores independientes. En cuanto al reparto de atribuciones, la única diferencia con respecto al segundo proyecto estribaba en la inclusión de la industria de defensa dentro del grupo de menesteres de gestión conjunta.

Por fin, el 23 de julio se publicó un cuarto proyecto de tratado que estaba previsto fuera oficialmente firmado el 20 de agosto<sup>91</sup>. En sustancia igual a las dos versiones anteriores, este proyecto incluía, sin embargo, una sustantiva novedad: situaba en régimen de decisión conjunta entre el centro y las repúblicas el control sobre los fondos a disposición del primero, de tal forma que la financiación de las actividades militares de la Unión requería de la aprobación previa de los estados signatarios.

### III. Después de agosto: a manera de conclusión

Tras romperse de manera más o menos clara los mecanismos de protección desplegados en el pasado, la crisis del sistema soviético ha alcanzado de lleno a sus fuerzas armadas. Graves problemas sociolaborales, reducciones significativas en el volumen del gasto en defensa y cambios notables en la naturaleza de la doctrina militar dan buena cuenta de una nueva realidad que ha tenido, por añadidura, efectos psicológicos de relieve: una pérdida dramática de presencia exterior, atestiguada por la desaparición del Pacto de Varsovia; una erosión innegable del prestigio profesional de la carrera militar y, en fin, una comprensible inquietud, en las fuerzas armadas, en lo que respecta a la caotización de todas las relaciones.

Sin demasiado éxito, Gorbachov intentó contrarrestar de diversas maneras los riesgos derivados de una situación como la descrita. Por un lado mostró un evidente empeño en mantener en pie una estructura estatal única y se cuidó muy mucho de tirar por la borda la simbología del orden burocrático. Por el otro, intentó jugar algunas cartas fuertes: subrayó ante la cúpula militar los beneficiosos efectos de una revolución tecnológica que se quería inminente, utilizó a las fuerzas armadas en tareas represivas allí donde las reivindicaciones nacionalistas eran fuertes e hizo todo lo

---

<sup>90</sup> *Pravda* (27 de junio de 1991).

<sup>91</sup> *Izvestia* (15 de agosto de 1991).

que estaba de su mano por cimentar un entorno internacional asentado en la confianza.

Tras el fallido golpe de agosto se hicieron realidad, sin embargo, los dos grandes temores de siempre de las fuerzas armadas soviéticas: el traspaso del poder a instancias externas al PCUS y el desmembramiento del Estado plurinacional nacido en los años veinte. Provisionalmente descabezadas —el golpe supuso una convulsión en una cúpula militar de la que desaparecieron el ministro de Defensa, Yázov; el jefe del Estado Mayor, Moiséyev, y el asesor personal de Gorbachov, Ajroméyev— y objeto de muchas críticas, las fuerzas armadas se mostraron incapaces de captar con prontitud las consecuencias de la revolución de agosto. Pese a ello, y aunque formalmente disueltas, es de suponer que las organizaciones del PCUS en las unidades militares han mantenido su vigor, en un caldo de cultivo en el que crecía el resquemor ante los nuevos poderes. Bien que cercenadas de sus fidelidades de siempre, las fuerzas armadas han permanecido relativamente intactas en su estructura y mandos. Han desaparecido, además, los controles que en el pasado las habían colocado bajo una estricta supervisión del poder civil. La “purga” operada en la cúpula militar en agosto no ha acabado, por otra parte, con los recelos en lo que se refiere a la lealtad de los máximos responsables de unas fuerzas armadas en las que ha seguido imponiéndose la lógica de los escalafones.

Nada que merezca el calificativo de “política militar” se ha abierto camino, por lo demás, en la Federación Rusa. Su presidente, Yeltsin, se ha limitado a capear un temporal que ha ido arreciando por momentos. Sus reacciones se resumen en tres grandes esfuerzos. Por un lado, Yeltsin ha intentado mantener en pie cierto grado de cohesión en el ejército, de la mano de la preservación de unas fuerzas estratégicas que, formalmente dependientes de la CEI, en los hechos parecen abocadas a ostentar un mando ruso; no es en modo alguno anecdótico al respecto que sean los dirigentes rusos quienes se hayan reservado el control de las armas nucleares correspondientes. En segundo término, Yeltsin se ha inclinado por una especie de reconversión de lealtades de las viejas fuerzas armadas “soviéticas”, que estarían llamadas a perder su carácter de tales en beneficio de una creciente “eslavización” de sus fidelidades. Como quiera que la política de las autoridades ucranianas ha impuesto trabas decisivas a la realización de este proyecto —que reclamaba, como es lógico, su aprobación—, Yeltsin parece haber replegado posiciones y haber pasado a defender una abierta “rusificación” militar. De ello da cuenta un lenguaje cargado de agresividad al servicio de un nacionalismo ruso de tonos cada vez más duros. Bestia negra para muchos militares, Yeltsin se presenta a los ojos de otros como una tabla de salvación en la que se concitan un renacimiento nacionalismo ruso y amenazas sin cuento a la periferia. En tercer y último lugar, Yeltsin, como por lo demás el presidente ucraniano, Kravchuk,

no ha ahorrado esfuerzos para mitigar la penosa situación económica de unas fuerzas armadas que en estas horas padecen también los efectos de las convulsiones nacionales en curso. Los nuevos dirigentes son conscientes de que muchos militares están dispuestos a hacer abstracción de principios y lealtades en beneficio de una presunta resolución de sus problemas económicos y sociales más acuciantes.

Mientras, no parece que la política de las potencias occidentales haya servido en exceso para aminorar las tensiones. Si bien es verdad que los Estados Unidos han mostrado alguna inclinación a prescindir de parte de sus arsenales nucleares o a reducir sensiblemente sus niveles de producción de cabezas atómicas, lo cierto es que no parecen dispuestos a cancelar ambiciosos programas de investigación y modernización; así lo atestigua, por encima de cualquier otra circunstancia, la pervivencia de los programas vinculados a la Iniciativa de Defensa Estratégica. Postergada la ratificación del tratado de reducción de armas nucleares estratégicas suscrito por los EE.UU. y la URSS en el verano de 1991, en los últimos tiempos apenas se han hecho notar propuestas de reanudación de negociaciones de las que pudiera derivarse un acuerdo global de reducción de tropas o dispositivos. Los Estados Unidos se han limitado a ofrecer respetables sumas de dinero para acelerar la destrucción, *unilateral*, del arsenal estratégico de la otrora superpotencia rival, oferta que, como es fácil suponer, no ha debido llenar de contento a la mayoría de los militares soviéticos.

...En una situación de crisis extrema, en la que —autoritarismo y capitalismo salvaje de por medio— se dan la mano la extensión del descontento popular y una notoria pérdida de confianza en los nuevos dirigentes, difícilmente puede sorprender que sean muchas las miradas que se vuelven hacia unas fuerzas armadas que configuran la única institución cuyas redes de organización y de presión se extienden todavía por todo el territorio de la vieja Unión. La perspectiva de un golpe militar remite directamente al problema de identificar cuál es el grado de división interna de las fuerzas armadas. Aunque hay quien estima que, al amparo de una crisis sin fondo, las diferencias en el seno de aquéllas se han limado de forma sensible, lo cierto es que la experiencia de agosto abre preocupantes incógnitas. Un enfrentamiento entre facciones militares, como el que estuvo a punto de producirse en el verano, conduce de manera casi inexorable a una guerra civil de consecuencias inimaginables en un escenario jalonado por un sinnúmero de cabezas y centrales nucleares. Es verdad, de cualquier modo, que la conciencia de este riesgo puede ser un estímulo para la moderación; las propias fuerzas armadas se han visto sometidas a una visible descomposición que acaso ha borrado del mapa la posibilidad de que en ellas cobre cuerpo un movimiento lo suficientemente fuerte para imponer una dictadura que dé crédito a este término.

Otro interrogante afecta a la naturaleza del proyecto que podría estar en las miras de los presuntos agentes interventores. A este respecto lo más probable es que se equivoquen quienes piensan que —por identificar con nombre y apellidos a uno de esos agentes— la cúpula militar no propugna otro horizonte que el de una especie de estalinismo renovado. Mucho más fácil de imaginar es, en cambio, una dictadura puesta al servicio de una abstrusa amalgama de proyectos aparentemente irreconciliables: un nacionalismo ruso de ribetes chauvinistas, la mitología del mercado en muchas de sus aberraciones, la idolatrización del orden y de la disciplina, y la voluntad, manifiesta, de preservar sólidas parcelas de poder burocrático. Con seguridad que más de uno de los ideólogos del nuevo autoritarismo que tal vez se avecina ha puesto sus ojos en esas astutas combinaciones del capitalismo más duro y la democracia más recortada que llevan los nombres de Corea del Sur y de China.